



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

**Procesos de desmovilización, desarme y reinserción de excombatientes a la vida civil.
Un estudio comparado: El Salvador, Sudáfrica y Colombia.**

Mauricio Ramírez Rivadeneira¹

Resumen.

Los procesos de desmovilización, desarme y reinserción de excombatientes a la vida civil son un punto neurálgico para la consecución de una paz estable y duradera, es por ello, que se hace necesario una correcta planeación y ejecución de las políticas del posconflicto apoyándose en la experiencia internacional y teniendo en cuenta el otorgamiento de medidas asistenciales transitorias y una correcta reincorporación de los desmovilizados dentro de la sociedad civil. Esto permitirá garantizar que la violencia no retorne, estableciéndose de esta forma, un escenario pacífico, estable y armonioso que ayude el desarrollo del país.

Palabras claves: Conflicto armado, Violencia, Paz, Desarme, Reinserción, Sociedad, Civiles, Colombia.

Processes of demobilization, disarmament and reintegration of ex-combatants into civilian life. A comparative study: El Salvador, South Africa and Colombia.

¹ Estudiante de derecho, Universidad Católica de Colombia, facultad de derecho, programa de pregrado. Artículo reflexivo para optar al título de abogado. Director, Dr. Ricardo Ariza López, profesor titular de la Catedra de Sociología Jurídica.

Abstract

The processes of demobilization, disarmament and reintegration of ex-combatants into civilian life are a neuralgic point for the establishment of a stable and lasting peace. It is for this reason that proper planning and execution of post-conflict policies is necessary, based on experience. And taking into account the granting of temporary assistance measures and a proper reincorporation of the demobilized within civil society. This will ensure that violence does not return establishing itself in this way, a peaceful, stable and harmonious stage that will help the development of the country.

Key Words: Armed conflict, Violence, Peace, Disarmament Reinsertion, Society, Civils, Colombia.

Sumario

Introducción.

1. Concepto de conflicto armado.

2. Procesos de desmovilización y reinserción en el ámbito internacional.

2.1 Proceso de DDR en El Salvador.

2.2 Proceso de DDR en Sudáfrica.

3. Reincorporación de las farc-ep a la vida civil dentro del actual acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera.

3.1. Costos de la implementación del acuerdo de paz.

Conclusiones.

Referencias.

Lista de siglas y abreviaturas utilizadas.

CNA: Congreso Nacional Africano.

CVR: Comisión de la Verdad y Reconciliación.

DDR: Desarme, Desmovilización y Reinserción.

FARC_EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo.

FMLN: Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.

ONG: Organización No Gubernamental.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Introducción

Son numerosos los conflictos armados que se han suscitado en el mundo, y cada continente ha sido testigo de la violencia sin sentido que se desprende de dichas disputas que traen muerte y desolación a las naciones que las padecen. Casos como los de Sudáfrica y El Salvador son una muestra de ello puesto que tienen mucho en común como, por ejemplo, la gran cantidad de víctimas y sangre derramada que dejaron. Pero así mismo, también poseen en común que el final de la guerra se manifestó en forma de diálogo y reconciliación, logrando superar de esta manera, la violencia que durante años fracturó la sociedad.

Dichos diálogos se transformaron en acuerdos de paz, los cuales contenían elementos sensibles que eran complejos de desarrollar de forma efectiva con el fin de que el objetivo que se pretendía lograr fuera sólido ya que finalmente, este es el propósito mayor de un acuerdo de paz, que la misma sea estable y duradera.

Del éxito en el desarrollo de lo acordado al interior de un proceso de paz, depende que la violencia del conflicto quede en el pasado o que esta renazca nuevamente de manera más fuerte y despiadada. Es por esto, que la voluntad política para lograr el objetivo principal debe estar presente no solo de forma previa al acuerdo sino también, posterior al conflicto dentro del marco denominado como posconflicto², lo cual es clave para que la violencia no retorne.

Uno de los elementos neurálgicos que contiene un acuerdo de paz que coloca fin a un conflicto armado, es el de la reintegración de los excombatientes, entiéndase reintegración de acuerdo con la definición de la Escola de Cultura de Pau (2011) como el “proceso por el que los ex combatientes adquieren la condición de civiles y obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares” (p.9).

² Periodo de tiempo posterior a la superación total o parcial de los conflictos armados. Fuente: <http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/>

Para ello es necesario que se contemplen situaciones internas y externas que permitan desarrollar los mecanismos apropiados para una reintegración exitosa, tal y como lo son las formas de financiación para el desarrollo de las políticas de reinserción de excombatientes.

Vale la pena aclarar, que la reintegración social y económica de los excombatientes debe contemplar “aspectos como la igualdad, la justicia, la equidad, el desarrollo económico, la superación de la pobreza, el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos, la solidez institucional y la seguridad” (Mejía, 2014, p.9), con el fin de garantizar que dichas personas se mantengan en la legalidad y no reincidan en la violencia debido a la falta de oportunidades, así mismo, es imprescindible que tengan garantizado el mínimo vital que les permitan sobrevivir dignamente, especialmente, en cuanto a posibilidades de empleo, formación y capacitación y acceso a servicios esenciales y fundamentales.

Lo anterior genera un importante interrogante, especialmente, para el caso de Colombia. Dicho cuestionamiento hace referencia a si ¿son idóneas las políticas de reintegración acordadas dentro del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en comparación con lo acordado en los procesos de paz de El Salvador y Sudáfrica?

Con el fin de dar respuesta a este interrogante, se tiene como objetivo general el analizar los procesos de reintegración de excombatientes que se han dado en El Salvador y Sudáfrica con el fin de identificar los éxitos y falencias de los mismos, los pros y los contras y los aciertos y errores cometidos que sirvan de experiencia para el caso de nuestro país.

Por otro lado, se analizará lo acordado dentro del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC para evidenciar si los instrumentos estipulados allí en cuanto a reintegración de excombatientes son eficientes y factibles de cumplir para el Estado colombiano.

Esta investigación se justifica en el trascendental momento por el que transita Colombia y en la importancia de una eficaz aplicación de los Acuerdos de Paz, no solo en materia de reparación, justicia, desarme sino también, en la reinserción de excombatientes,

circunstancias que permitirán lograr una verdadera reconciliación ya que como mencionó Rettberg (2009) “uno de los mayores retos para la construcción de paz ha sido la reconstrucción, o la construcción desde cero, de relaciones no violentas y lazos de confianza en ámbitos locales” (p.170). Lo que implica, que no solo basta la voluntad política, sino que, también depende de nosotros que ese deseo de paz se materialice a través del perdón en beneficio de una nueva Colombia.

1. Concepto de conflicto armado.

Para comenzar a definir el concepto de conflicto armado, se puede partir desde la definición que brinda el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la Protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1979, el cual indica que aquellas conflagraciones que se desarrollan:

[...] en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

No obstante, el conflicto armado no solo se caracteriza por ser un enfrentamiento bélico entre dos partes, sino que al mismo tiempo, cuenta con unas condiciones especiales en su desarrollo, las cuales dependerán del lugar en donde se presente, por ejemplo, el caso del conflicto armado colombiano es muy distinto al que se pudo haber presentado en El Salvador o en Sudáfrica, en ello influyen factores sociales, económicos, culturales y políticos que permiten una evolución y transformación del mismo y que es propio de cada nación que padezca la confrontación armada.

Ejemplo de ello, es que la evolución y transformación del conflicto armado en Sudáfrica se presentó por factores raciales debido a la política del Apartheid que de acuerdo con Cotrina (2013a):

[...] tuvo su origen en 1662, cuando los primeros europeos llegaron a África y con ellos el “paradigma” de la superioridad del blanco sobre los nativos africanos, que se prolongó por más de 300 años, robó la dignidad de la etnia negra y creó una “lógica” en la cual el otro y sobre todo por ser de color, era inferior y diferente. (p. 33)

Por otro lado, el conflicto armado colombiano encuentra sus raíces en las profundas desigualdades sociales, en la lucha por la tierra, por la explotación de recursos naturales, en la pobreza y en el abandono por parte del Estado hacia los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, tales como los son: los campesinos, indígenas o la población afrodescendiente, entre otras causas más (Yaffe, 2011, p. 32). Por lo tanto, “[el] conflicto colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos”. (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 111).

Visto lo anterior, vale la pena aclarar que la clase de conflicto armado de la que se habla dentro de esta investigación corresponde a la denominada por los tratados internacionales como los “conflictos armados no internacionales” los cuales se caracterizan por no traspasar las fronteras del país en donde se desarrollan y son llevados a cabo entre el Estado y los grupos al margen de la ley.

Es así, que el Artículo 1º del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977 citado por Trejos (2008), define al conflicto armado interno como aquel que se presenta entre las fuerzas armadas de un Estado y “fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (p. 3).

Por su lado, la Escola de Cultura de Pau. (2005), define al conflicto armado como:

[T]odo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole (tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición,

grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas) que, utilizando armas u otras medidas de destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año. (p. 3)

De acuerdo con lo anterior, un conflicto armado interno se caracteriza por ser una confrontación armada llevada a cabo entre las fuerzas militares de un Estado y entre grupos armados que se encuentra al margen de la ley, quienes poseen una estructura, logística y el suficiente poder como para lograr controlar determinada parte del territorio de una nación y con una capacidad de armamento que les permite hacer frente a las acciones que ejerce el Estado para contrarrestarlos.

Del mismo modo, la conflagración y todas sus acciones bélicas también se pueden presentar entre grupos armados entre sí. Lo anterior, sin necesidad de que las fuerzas militares de un Estado participen de forma directa en la confrontación o sin que estas últimas, sean el objetivo militar de cualquiera de los grupos ilegales que se hayan alzado en armas.

Además, dicha capacidad bélica les permite a estos actores del conflicto ejecutar acciones que en la actualidad se consideran como terroristas y que se encuentran enfocadas en generar zozobra y preocupación en la población con el fin de demostrar su poderío. De acuerdo con Hacker (1975) citado por (Torres, 2010, p. 82), “el terrorismo es la intimidación, esporádica u organizada, que esgrimen los débiles, los ambiciosos o los descontentos contra los poderosos”, sin embargo, dichas acciones y las demás que son inherentes al desarrollo de un conflicto armado no solo afectan a los más poderosos, sino que infortunadamente, las consecuencias las tiene que soportar principalmente, la población civil, especialmente, quienes de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales y culturales se hallan en circunstancias de mayor vulnerabilidad.

Lo anterior representa una realidad innegable, y es que los conflictos armados dejan tras de sí múltiples vulneraciones, trasgresiones y violaciones a los derechos humanos y destruyen el tejido social. Esto se refleja en un ambiente de incertidumbre, subdesarrollo, inestabilidad y violencia al interior del Estado, lo que trae como consecuencia altos índices de desplazamiento forzado como ocurre en Colombia y de por sí, en todos los lugares donde exista una confrontación interna. En la actualidad, Siria y Colombia son los mayores y más

claros ejemplos en donde se presenta el desplazamiento forzado como un fenómeno inherente de un conflicto armado interno, además, de ser la circunstancia que deja el mayor de número de víctimas.

Se puede colegir entonces, que un conflicto armado es una situación que va más allá de un simple enfrentamiento armado, sino que, además, repercute negativamente en distintos aspectos a nivel político, social y económico del Estado que no permiten un desarrollo adecuado. Por ejemplo, en el caso de Colombia el conflicto interno se caracteriza por “contener un cuadro agudo de violación de derechos humanos, con niveles de impunidad elevadísimos y una pobreza que aqueja a más de la mitad de la población” (González, 2011, p. 9), circunstancias que asientan el establecimiento de escenarios idóneos para que la confrontación se transforme y mute de forma mucho más violenta.

La violencia del conflicto armado y la vulneración de derechos humanos afectan el desarrollo económico del Estado, puesto que el mismo debe destinar mayores recursos para contrarrestar las acciones de los grupos armados, para la reparación de víctimas y, además, la inversión extranjera se ve frenada debido al ambiente de inseguridad que se pueda vivir en el país. Frente a esto último, Collier (1999) citado por Arias, Camacho, Ibáñez, Mejía y Rodríguez (2014) manifestó que “el crecimiento económico durante los periodos de conflicto de los países es aproximadamente un 2.2% inferior al obtenido en tiempos de paz” (p. 36).

Por lo tanto, el conflicto armado es una condición que debe resolverse de la manera más inmediata posible al interior del Estado que lo padece, puesto que si la confrontación perdura en el tiempo como ha sucedido en Colombia, las consecuencias son nefastas, es por ello, que a través de la experiencia internacional sea han podido crear y mejorar los mecanismos de desmovilización, desarme, reintegración y de justicia transicional que permiten una transición hacia escenarios de paz los cuales permitirán desarrollar de mejor forma al país.

[El] uso de las armas provoca muerte y destrucción, miedo, desplazamientos forzados, deseos de venganza y odios. El balance es siempre negativo, por lo que la dejación de las armas o el silencio de las mismas ha sido siempre celebrado como una oportunidad

para el reencuentro, la reconciliación, la reconstrucción y la cura de las heridas provocadas por el uso de las armas. (Escola de Cultura de Pau, 2011, p. 5)

2. Procesos de desmovilización, desarme y reinserción en el ámbito internacional.

Los procesos de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), se presentan al momento de la finalización de un conflicto armado, el cual culmina regularmente a través de la firma de un acuerdo de paz, tal y como sucede actualmente con el acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Según la ONU, citada por el IEGAP (2013) el DDR es el proceso de “remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares, y la asistencia a estos para integrarse social, y económicamente en la sociedad mediante formas civiles” (p. 13).

Es importante que se entienda, que los procesos de DDR no representan la rendición, ni la humillación de los grupos armados que se acogen a ellos, por el contrario, el proceso debe enfocarse en dignificar a las personas, independientemente de si los desmovilizados eran quienes con anterioridad empuñaban las armas y, por lo tanto, causaban violencia y zozobra dentro de la población. Esta situación es de suma importancia para que el proceso no fracase, ya que la voluntad y la confianza con miras al posconflicto entre las partes que firman el acuerdo de paz deben ser absolutas.

Por ende, el DDR, debe ser muy bien pensado y planificado en las negociaciones previas a la firma de la paz, ya que este proceso se convierte en un elemento “intermedio entre el acuerdo de paz y la reconstrucción o rehabilitación de un país o una región” (Escola de Cultura de Pau, 2011, p. 5). En consecuencia, de su eficaz aplicación dependerá el éxito e irreversibilidad de la paz.

Ahora bien, los procesos de desmovilización, desarme y reinserción deben contener varios compromisos indispensables para que los mismos sean eficaces, entre ellos se pueden encontrar los siguientes: preparar y transformar a los excombatientes para que se conviertan

en instrumentos de paz y deben incidir, además, en las raíces propias del conflicto, esto significa, que deben enfocarse en superar aquellos escenarios que dieron origen al mismo y que a su vez, alimentaron la confrontación. Tal es el caso de las situaciones de desigualdad social, la falta de oportunidades, el acceso a servicios públicos, educación y salud, entre muchas circunstancias más.

De igual manera, los procesos de DDR, también deben contener unos objetivos claros enfocados en poder garantizar una paz duradera, dichos objetivos son descritos por la Escola de Cultura de Pau (2011) de la siguiente manera:

- contribuir a la seguridad y la estabilidad
- facilitar la reintegración de los ex combatientes a la vida civil
- devolver la confianza a las partes enfrentadas
- prevenir o mitigar futuras violencias
- contribuir a la reconciliación
- liberar recursos humanos y económicos para la reconstrucción y el desarrollo. (p. 6)

Así mismo, los procesos de DDR se encuentran compuestos por distintas etapas y en cada una de ellas llevan a cabo una función específica, como, por ejemplo: en la etapa de desarme se recogen, documentan, controlan y se destruyen todo tipo de armas que sean entregadas por los excombatientes, en la desmovilización se realiza una desvinculación de los miembros activos del grupo armado, quienes deberán ser acantonados y concentrados en las zonas y lugares que se habiliten para ello.

Posteriormente, viene la fase de reinserción la cual implica “la integración a la sociedad de aquel individuo que se encuentra viviendo al margen de esta” (Cabello, 2014, p. 7), en la reinserción se otorgan a los excombatientes y a sus familias una asistencia transitoria y temporal que permite cubrir las necesidades básicas de estos sujetos, dentro de ellas se encuentran el otorgamiento de alimentos, ropa, prestación de servicios médicos, formación

educativa de corto plazo como por ejemplo la enseñanza de oficios o de carreras técnicas que permitan que los desmovilizados adquieran habilidades para que un futuro puedan aplicar a algún tipo de empleo.

Finalmente viene la fase de reintegración, un proceso mediante el cual los excombatientes adquieren la condición de civiles, esto se logra a través de la obtención de empleos dignos y legales que les garanticen los ingresos regulares que les permitirán subsistir y llevar una vida digna y alejada de las armas. Para ello, se requiere el compromiso de la sociedad en general, y especialmente, de los empresarios y comerciantes quienes pueden generar mayores oportunidades de empleo a los que podrán acceder aquellos individuos que volvieron a la vida civil.

Para lograr lo anterior, también es necesario que el gobierno ofrezca incentivos fiscales a las empresas que generen empleos para los reintegrados y así mismo, se convierte en un deber estatal el crear y otorgar líneas de microcrédito con el fin de que los excombatientes establezcan sus propias microempresas y/o actividades autónomas que les permitan generar sus propios ingresos sin necesidad de recurrir nuevamente a la violencia o a la delincuencia.

De igual manera, para poder hacer realidad el proceso de DDR de forma eficaz se hace imperioso establecer determinadas condiciones indispensables para el desarrollo y materialización del proceso. Por consiguiente, debe existir un marco legal e instituciones capaces de organizarlo y gestionarlo de forma correcta, así como también, disponer de los recursos suficientes para llevar a cabo y ejecutar las políticas del DDR y cubrir todas sus etapas, debe existir igualmente, una decisión firme y confianza por parte de los combatientes para ingresar al proceso, debe existir seguridad comunitaria que permita garantizar el retorno de los excombatientes a sus lugares de origen, al igual, que es necesario que se les preste la respectiva seguridad humana, esto es, garantizar su integridad personal (Escola de Cultura de Pau, 2011, p. 12).

Lo anterior, es debido a que todo proceso de DDR debe ir acompañado de medidas políticas, económicas y sociales que permitan el retorno a sus lugares de origen, no solo de los excombatientes sino también de las personas desplazadas y refugiadas, es indispensable

crear mecanismos de justicia transicional con el fin de evitar el sentimiento de impunidad dentro de la sociedad, se debe garantizar la formación de nuevos partidos políticos con el fin de que los grupos armados cambien las armas por el debate a través de la política, se deben crear comisiones de la verdad con el fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos y garantizar el derecho a la memoria histórica como forma de reparación, al igual que se hace necesario, establecer mecanismos de reconciliación, entre otras medidas más.

Todas aquellas medidas deberán otorgarse de manera temporal, es decir, que pueden durar varios meses; sin embargo, no es conveniente que se extiendan en el tiempo para no generar una dependencia por parte de los beneficiarios. De todas formas, si es necesario que el proceso de DDR comience lo más pronto posible una vez que se haya firmado el acuerdo de paz, no conviene que pase mucho tiempo para comenzar con las fases de desmovilización, desarme y reinserción, ya que la demora en ello podría ocasionar desconfianza e inseguridad en los excombatientes y el proceso fácilmente fracasaría.

Los procesos de DDR son fundamentales para el establecimiento de una paz duradera, a pesar de las críticas que cuestionan, por ejemplo; “la inequidad en el trato de excombatientes y víctimas del conflicto, las limitaciones en el diseño y ejecución de la justicia transicional, y los nuevos fenómenos de violencia que han surgido después de la desmovilización” (Nussio, 2013, p. 11). Sin embargo, no debe perderse la confianza en los mismos, ya que de la eficacia en la implementación del proceso de DDR dependerá el retorno de la violencia o el establecimiento de un ambiente armonioso con respecto al grupo armado con el que se firmó el acuerdo de paz.

Cada proceso de DDR es diferente, algunos funcionan y muchos fracasan, sin embargo, dichas experiencias sirven como ejemplo para Colombia, aunque, actualmente ya quedaron pactadas las medidas asistenciales que se le otorgarán a los excombatientes de las FARC, situación que ha generado bastante polémica. Por lo tanto, se pretende en esta investigación comparar lo otorgado a los excombatientes en los procesos de DDR de EL Salvador y Sudáfrica para evidenciar si lo que se les otorgará a los exguerrilleros es demasiado o está acorde con los estándares y experiencias internacionales.

Estos dos países fueron elegidos para desarrollar esta investigación, debido a que los mismos han sido un claro ejemplo de éxito a nivel internacional en cuanto a la superación de conflictos armados, puesto que, es un hecho fehaciente y claro que la violencia originada por circunstancias de confrontaciones bélicas internas no volvieron a verse ni a suceder dentro de estas dos naciones.

Es por ello, que vale la pena analizar los procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción que se dieron en estas dos naciones para identificar si los mismos también fueron eficaces y si las medidas que se tomaron al interior del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las Farc son idóneas comparadas con las de estos dos países, y si las mismas permiten garantizar una paz estable y duradera en el entendido de que los desmovilizados no volverán a las armas o la delincuencia.

2.1. Proceso de DDR en El Salvador.

El proceso de desmovilización, desarme y reinserción en El Salvador se caracterizó en primer lugar por no haber sido incluido dentro de los diálogos que culminaron con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec de 1992, lo que significa, que hubo poca planeación frente al posconflicto, situación que originó dificultades para la adecuada implementación de los programas del DDR.

Aunque como indicó Guáqueta (2005), al grupo insurgente del FMLN³ no le interesaba tanto los paquetes económicos o asistenciales que se les daría una vez firmada la paz, sino que, lo que les importaba en realidad era “establecer un régimen democrático, legalizar la izquierda y reformar las fuerzas armadas” (p. 9), esto fue lo que se constituyó como parte de los beneficios trascendentales para los excombatientes.

En el proceso de DDR de El Salvador se instauró un plan maestro de reconstrucción nacional de largo plazo y se creó una entidad denominada como la Secretaría de

³ Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, grupo guerrillero que operó en El Salvador con el cual se firmaron los acuerdos de paz.

reconstrucción Nacional, esto se hizo con el fin de atender tanto a los excombatientes como a las otras poblaciones afectadas por el conflicto o que se encontraban en condición de vulnerabilidad. De igual manera, a través de estos instrumentos se buscó lograr la aceptación de los desmovilizados por parte de las comunidades, se implementaron políticas económicas y sociales con el fin de facilitar la reincorporación y la reconstrucción de los lugares afectados por la guerra.

Lo anterior, demuestra la importancia de contar con instituciones encargadas de implementar de manera eficaz las políticas para el posconflicto. Máxime, cuando los procesos de DDR demandan bastante tiempo y planeación. En El Salvador, por ejemplo, los programas de reinserción duraron entre 4 a 6 años.

Ahora bien, en cuanto a los paquetes de beneficios y medidas económicas instauradas y dispuestas en el marco de la reinserción y reintegración de los excombatientes, fueron otorgadas las siguientes: tratamiento psicológico, atención médica, trato diferencial para los combatientes que ostentaban mando, para ellos los paquetes de beneficios fueron mucho más amplios, esto permitió “que los acuerdos negociados con los comandantes se volvieran incluyentes para todos los combatientes porque aun respetaban su liderazgo” (Guáqueta, 2005, p. 17).

Del mismo modo, y al igual que como sucede actualmente en Colombia, los excombatientes en El Salvador fueron ubicados en zonas transitorias que se encontraban restringidas, allí se les garantizó la seguridad y se les prestó la respectiva atención médica, se otorgaron alimentos y vivienda, estas medidas se otorgaron de forma temporal. De otro lado, a los excombatientes se les formó a nivel educativo y técnico, esto debido a que no todos los excombatientes tenían las capacidades y aptitudes para crear sus propias microempresas, por lo tanto, era necesario prepararlos con el fin de que logran acceder a un empleo. Para ello, fueron concedidas becas que cubrían el costo de libros y manutención, las mismas se encontraban condicionadas al buen desempeño académico.

No obstante, una vez que los excombatientes culminaban su formación académica, se les hizo bastante complicado el poder acceder a algún tipo de empleo, lo anterior debido al nivel

de subdesarrollo del país, lo cual influye drásticamente en las tasas de desempleo de un Estado (Lara, 2015, p 25). Esta condición se presentó a pesar de que los empresarios apoyaron el proceso de paz, ya que claramente eso representaba un clima más favorable para el desarrollo de sus negocios.

Lo descrito con anterioridad, refleja la necesidad de que el Estado incentive la inversión extranjera y a los empresarios nacionales con la finalidad de que generen opciones de empleo dignas para los excombatientes, una situación que sin duda alguna los alejará de las armas y de la delincuencia, puesto que a través del empleo obtienen los ingresos para su supervivencia y la de sus familias.

No hay que olvidar que los excombatientes una vez que han finalizado la desmovilización pierden sus medios habituales de ingresos y es por ello, que se hace necesario que se proporcionen los medios idóneos para que los desmovilizados y sus familias vivan dignamente, circunstancia que se puede lograr a través de la generación y el acceso a oportunidades de empleo.

De igual manera, dentro del proceso de DDR del El Salvador hubo un factor de importante trascendencia como le fue la reforma agraria, mecanismo que permitió la transferencia de tierras del Estado y del excedente que se encontraba en manos de los privados el cual sobrepasaba los límites estipulados por dicha reforma. Esta adjudicación de tierras a los excombatientes, se realizó con el fin de que los mismos lograran trabajarla para así obtener recursos e ingresos de forma autónoma.

También se implementó un programa destinado a la construcción y entrega de viviendas, el cual no pudo ser completado debido a la falta de capacidad estatal y a la falta de recursos para su entera implementación. Con respecto al tema de los recursos económicos, vale la pena decir, que la escasez de ellos, la poca planeación, el incumplimiento en los plazos de entrega de las donaciones que fueron prometidas y la mala destinación que se le dio a los mismos originaron problemas y demoras en la ejecución de las políticas establecidas para el posconflicto.

Es por ello, que durante los diálogos de paz de un conflicto armado cualquiera que sea, se debe contemplar con mucha anterioridad el costo que tiene el periodo que prosigue a la culminación de la guerra, así como es indispensable dejar clara la manera como se conseguirá la financiación económica que permita el cumplimiento y la eficaz ejecución de las políticas destinadas para el posconflicto, esto es esencial para que la paz sea estable.

A su vez, dentro del proceso de DDR de El Salvador, se permitió que los integrantes del FMLN conformaran cerca de 170 ONG, estas organizaciones se encargaban de servir como intermediarios entre el Estado salvadoreño y los desmovilizados, con el fin de trabajar conjuntamente por la reconstrucción del país (Guáqueta, 2005, p. 3). Igualmente, se originó un partido político conformado por los antiguos excombatientes, propiciando de esta forma un ambiente de debate regido bajo las reglas claras de la democracia.

Sin duda alguna, la participación política y la transformación de grupo insurgente a partido político trajo buenos resultados para este antiguo movimiento guerrillero, puesto que el actual presidente de El Salvador pertenece al FMLN, lo cual indica que la política, el debate y el dialogo son mucho más eficaces que tratar de lograr el poder mediante el uso de las armas.

Finalmente, en El Salvador se creó una comisión de la verdad que se encargó de tratar de esclarecer los hechos y de descifrar los orígenes del conflicto, además, de realizar una serie de recomendaciones con el fin de garantizar la no repetición de los hechos, sin embargo, como expresó Cifuentes (2016):

[...] todo este esfuerzo de la comisión de la verdad y lo logrado tras la firma del acuerdo definitivo para la construcción de la paz en El Salvador se vio empañado con la ley de amnistía aprobada tan solo 5 días después de haber sido presentado el informe final por parte de la Comisión, esto representó impunidad ya que los responsables de cometer crímenes atroces durante el conflicto no fueron castigados. (pp. 33-34)

De esa manera se cerró la puerta a la verdad a la justicia y a la reparación, puesto que nadie fue juzgado ni condenado por los delitos que fueron cometidos durante el periodo del

conflicto armado y por lo tanto, ningún individuo fue obligado a revelar la verdad, elemento que es trascendental para lograr una verdadera reconciliación al interior de la sociedad.

El proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de combatientes no siempre está integrado a una política de paz que promueva la transformación social y erradique de fondo las causas originales del conflicto armado. Es común encontrar que la planeación de estos no ha sido detallada y comprehensiva. (Springer, 2005, pp. 62- 63)

Se puede colegir, que el proceso de DDR de El Salvador incorporó mecanismos asistenciales que son necesarios una vez que se firme el acuerdo de paz, ya que los excombatientes poseen necesidades que deben ser cubiertas y satisfechas, además, es necesario que se les brinden mecanismos y alternativas con el fin de garantizar su subsistencia sin necesidad de que tengan que recurrir a la violencia o la delincuencia.

Sin embargo, la falta de planeación previa es un error que Colombia hasta el momento no ha cometido, ya que dentro de los acuerdos de paz firmados con La guerrilla de las FARC si se incluyeron previamente los planes y medidas asistenciales que se otorgarían, a diferencia de lo que ocurrió en El Salvador, en donde se comenzó a planear el proceso de DDR de forma posterior a la firma del acuerdo de paz.

2.2. Proceso de DDR en Sudáfrica.

El proceso de DDR en Sudáfrica se dio luego de finalizado el conflicto armado entre el gobierno sudafricano y el Congreso Nacional Africano (CNA) que era liderado por Nelson Mandela, enfrentamiento que se suscitó, por cuestiones raciales, puesto que en el país se había implementado una política de segregación conocida como el Apartheid con la que se discriminada y marginaba a las personas de raza negra, configurándose de esta manera una supremacía blanca que representó una fuerte vulneración de los derechos humanos, circunstancia que trajo como consecuencia una oposición armada por parte de grupos guerrilleros que buscaban implementar un régimen político más incluyente y democrático.

El Apartheid, palabra afrikáner que significa “separación”, expresaba un sistema de segregación que provenía desde la época de la colonia: “Con ese término el gobierno de Sudáfrica designa al régimen económico, político y social que, bajo la máscara del ‘desarrollo separado’ de las razas que viven en su territorio, se pretende convertir en fundamento ‘jurídico’ para decidir los destinos de la nación y de sus bienes sin intervención de sus habitantes no blancos, que constituyen la abrumadora mayoría de la nación”. (Argemi, 2010, pp. 1-2)

Ahora bien, “el proceso de paz en Sudáfrica es considerado como uno de los más exitosos del mundo” (Barreto, 2016, p. 75), esto, debido a que se logró una transformación total dentro del país y la reconciliación se hizo presente. Situación que favoreció el ambiente y los escenarios para que la nación se desarrollara a nivel político, económico y social.

Dentro de las medidas tomadas al interior del DDR en Sudáfrica, se incluyeron el tema de la participación política, la cual se presentó en distintas etapas pasando en primer lugar por el reconocimiento del CNA como partido político ya que el mismo había sido declarado ilegal en el año 1960, hasta lograr su consolidación hacia principios de los años 90. Algo similar a lo ocurrido en El Salvador, en donde un movimiento revolucionario armado se transformó en una fuerza política importante logrando cometidos trascendentales como por ejemplo, el llegar al poder.

De nuevo se demuestra, que el debate político es más eficaz que la lucha armada. En el caso de Sudáfrica al igual que como ocurre en El Salvador, quienes se encuentran en el poder fungiendo los roles de presidentes elegidos democráticamente pertenecen a los partidos derivados de los otrora grupos armados al margen de la ley.

A diferencia de El Salvador, en Sudáfrica se convocó y se celebró una asamblea nacional constituyente que se encargó de otorgar garantías de igualdad, inclusión y no discriminación a nivel político, económico, social, educativo, entre otros aspectos más, con el fin de que la población negra disfrutara de los mismos derechos y garantías que tenía la población blanca (Barreto, 2016, p. 13). Dicha asamblea, planteó principios que garantizaban la prohibición de todo acto de discriminación, pero no solo de los blancos hacía los negros, sino que

también, garantizaba la no marginación de la población blanca por parte de la población negra que claramente es mayoría.

[...] la mayoría de la población que suma un 70% es de color negro (shosas, zulúes y otros), más otro 19% de población de raza blanca u origen holandés (bóers) más un 9% que se compone de mestizos llamados coloured, descendiente de los holandeses y esclavos de origen malayo, finalmente un tercer grupo que se compone de un 2% de personas hindúes que se ubican alrededor de Durban. (Agudelo y Gómez, 2015, p. 31-32)

Como muestra de las nuevas políticas inclusivas que se pretendían implementar en el Estado Sudafricano, se instauró durante el proceso de paz y del DDR un gobierno transitorio que se encontraba conformado tanto por personas blancas como por personas negras, superando de esa manera las barreras de racismo y discriminación que se venían presentado durante décadas en la nación. Por lo tanto, este tipo de gobierno de unidad garantizó la participación política en unas condiciones incluyentes y favorables que no se habían visto antes, ya que el derecho al voto durante el Apartheid se encontraba permitido solo para la población blanca.

En cuanto a las amnistías e indultos en el proceso de DDR de Sudáfrica, se otorgaron en virtud de la labor realizada por la creada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), una institución temporal a la cual se le otorgaron facultades casi jurisdiccionales, ya que de este organismo dependía si se le otorgaba la amnistía o el indulto al excombatiente, puesto que era una beneficio que se encontraba condicionado a una retribución, lo que quiere decir, que quienes deseaban acceder a este beneficio debían entregar algo a cambio que en este caso era la verdad.

A la CVR acudieron todos aquellos individuos que habían cometido violaciones a los derechos humanos con el fin de declarar en audiencia pública a la que podían asistir todos los que se consideraran víctimas, si los excombatientes contaban la verdad y ayudaban a esclarecer los hechos sucedidos durante el conflicto armado no se activaría la justicia ni se impondrían sanciones de tipo penal. En principio no hubo una aceptación por parte de la toda

la población, pero finalmente la sociedad y en especial las víctimas cedieron, ya que observaron que en el beneficio de las amnistías e indultos otorgados a los desmovilizados se configuraba una esperanza para conocer la verdad de los hechos. (Barreto, 2016, p. 23).

Hubo dos elementos significativos que se dieron en Sudáfrica: el proceso de verdad y reconciliación. El nuevo Gobierno estableció una Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), y su accionar fue consensuado en medio de las negociaciones. Este intento muy innovador, dejó ver la tensión permanente entre verdad y justicia, y brindó la posibilidad de saber qué pasó con alguien vs la suspensión de la pena, pero no su absolución. (Cotrina, 2013b, p. 4)

Ahora bien, pueda que el proceso de reintegración en cuanto a lo político haya sido eficaz dentro del DDR de Sudáfrica, sin embargo, en cuanto a la reintegración económica y social si se presentaron bastantes inconvenientes, comenzando porque en primer lugar se creó una sola fuerza militar armada para el país que se compuso por militares y desmovilizados, esto creó un ambiente tenso al interior de dicha institución ya que se encontraban frente a frente antiguos enemigos, situación que originó cierto rechazo y un trato diferenciado para los desmovilizados.

Por otro lado, no existió un registro oficial de las armas entregadas por los excombatientes dentro del proceso de desarme, esto ocasionó que existiera un alto flujo de armamento en manos de civiles, situación que coloca en riesgo la seguridad y estabilidad de la paz de un Estado. Circunstancia distinta a lo que recientemente ocurrió en Colombia en donde la ONU certificó el desarme completo de las FARC en donde se contabilizaron 7.132 armas entregadas.⁴ “[En] Sudáfrica después de la desmovilización y la “conclusión” del apartheid subió el porte de armas de fuego” (Cárdenas, 2011, p. 21).

⁴ Se puede leer sobre este asunto en el artículo de la revista semana que se encuentra disponible en el siguiente link: <http://www.semana.com/nacion/articulo/dejacion-de-las-armas-de-las-farc-es-certificado-por-la-onu/530062>

De igual manera, se establecieron compensaciones económicas para los desmovilizados, incluso en algunos casos los excombatientes podían acceder a una pensión, sin embargo, dicha compensación económica no fue suficiente ya que los reinsertados necesitaban tener medios de subsistencia para sí mismos y para sus familias, situación que no fue garantizada por el proceso de DDR debido a la falta de planeación para la ejecución de programas de capacitación y formación empresarial y laboral. Por lo tanto, los excombatientes no lograron acceder a oportunidades de empleo y las pocas iniciativas de microempresa fracasaron debido a la falta de aptitudes y educación, a esto hay que sumarle la tasa de desempleo que tenía el país.

El DDR no garantizó los mecanismos de subsistencia de los excombatientes, por ende, los desmovilizados no lograron valerse por sí mismos. Así mismo, tampoco recibieron ayuda psicológica ni mucho menos existió una atención especializada con enfoque de género. Por lo tanto, las mujeres combatientes y las mujeres víctimas del conflicto fueron proclives a situaciones extremas de vulnerabilidad, para lo cual se hacía necesario una atención especial.

Es por ello, que la figura del enfoque de género no hace referencia a una imposición de ideología de carácter de identidad sexual como se ha querido tergiversar, sino que, se encamina en la protección especial de la mujer. Para entender lo anterior, basta con leer los principios en los que se funda el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmados entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, en donde es posible hallar la siguiente definición:

Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes

y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades. (p.12)

Por lo tanto, el proceso de DRR de Sudáfrica deja como enseñanza que el camino político y democrático es el mejor instrumento que se puede utilizar para la consecución de objetivos primordiales como por ejemplo, el llegar al poder. Muestra de ello, es que a partir de la finalización del conflicto armado sudafricano todos los presidentes que han sido elegidos democráticamente pertenecen al partido político que algún día fue un grupo armado al margen de la ley.

De igual manera, cuando una sociedad se compromete con la transición de un ambiente hostil a un ambiente de paz, se pueden lograr caminos mucho más claros para conseguir la reconciliación. Para ello es indispensable que en un acuerdo de paz se tenga en cuenta las necesidades de la población como se presentó en Sudáfrica, en donde el proceso de paz se centró en eliminar las desigualdades raciales que existían hasta entonces y que eran el principal factor del conflicto armado.

Lo anterior, se logró a pesar de que no hubo una participación clara por parte de la sociedad civil en el proceso de paz, a diferencia de lo ocurrido en Colombia donde se realizaron esfuerzos grandes para que toda la sociedad y especialmente las víctimas hicieran parte de la construcción del camino hacia la paz, incluso se puso en consideración del pueblo a través de un referéndum si se aceptaban o no los acuerdos, aunque la discusión sobre si esta circunstancia fue la mejor decisión por parte del gobierno ya que no estaba obligado a hacerlo no es objeto de esta investigación.

De otra parte, al no aplicarse algún tipo de sanción penal ni retributiva dentro un sistema de justicia transicional, hizo que se presentara una sensación de impunidad al interior de la sociedad, ya que no se les garantizó a las víctimas el derecho a la justicia tal y como ocurrió en El Salvador, esto como consecuencia de los indultos y amnistías otorgadas. Por consiguiente, se hace necesario que dentro de un acuerdo de paz se estipulen mecanismos no

solo de verdad, sino también de justicia, reparación y no repetición de los hechos, situación que en los procesos de DDR que se han analizado no se presentaron.

3. Reincorporación de las farc-ep a la vida civil dentro del actual acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera.

A continuación, se pretenderá analizar los beneficios que obtendrán los desmovilizados del grupo guerrillero de las FARC en virtud de lo acordado en La Habana, Cuba, situación que ha originado cierto malestar dentro de la sociedad colombiana en el entendido de que se cree que lo que se les está otorgando a los desmovilizados no es merecido por ellos y que por lo tanto, se configura un mal ejemplo a nivel social ya que se podría pensar que ser “criminal paga”.

El proceso de DDR para los desmovilizados de las FARC en Colombia hasta ahora se está implementando, pero a diferencia de lo ocurrido en El Salvador y en Sudáfrica si se planearon dentro de las negociaciones de paz los mecanismos de reinserción y reinsertación para los desmovilizados, los cuales quedaron consignados dentro del acuerdo final firmado en el Teatro Colón el día 24 de noviembre de 2016.

Por lo tanto, tenemos que dentro del acuerdo final se estipuló por ejemplo una reforma rural integral (punto 1 del acuerdo) que se basa en los principios de transformación estructural, esto representa transformar el campo de forma igualitaria y equitativa; desarrollo integral, esto equivale a mejorar las formas de producción del campo, haciéndolas más competitivas a través del fomento de la inversión y protección de la economía campesina.

Lo anterior, fue regulado a través del decreto 893 del 28 de mayo de 2017 que se erige como un instrumento por medio del cual se hace posible planificar y gestionar la implementación de los planes y programas enfocados en una reforma rural integral, circunstancia que tiene por finalidad la transformación estructural del campo.

Del mismo modo, se plantearon los siguientes principios

- Igualdad y enfoque de género: que representan la especial protección y condiciones igualitarias para la mujer frente al goce y salvaguarda de sus derechos.
- Bienestar y buen vivir: tienen como objetivo la erradicación de la pobreza.

Priorización: tiene como objetivo que la ejecución de las políticas del posconflicto se prioricen en las zonas y poblaciones más vulnerables.

- Restablecimiento: es restituir los derechos de las víctimas de desplazamiento y despojo.
- Regulación de la propiedad: es el compromiso de luchar contra la ilegalidad, la usurpación y el despojo de tierras campesinas.
- Derecho a la alimentación: es garantizar el acceso a la alimentación sana y adecuada.
- Participación, significa que para la ejecución de los planes y política se tendrá en cuenta la activa participación de las comunidades.
- Presencia del Estado: implica el compromiso de ampliar la presencia del Estado en el territorio rural, entre otros principios más.

De igual manera, el gobierno se compromete a otorgar subsidios y créditos para el acceso a la vivienda. Los beneficiarios de estos subsidios serán aquellas personas con vocación de trabajo rural que posean o no tierras, priorizando de manera especial a las víctimas del conflicto armado, a los desplazados y a las mujeres, por lo tanto, las tierras no se repartirán entre los desmovilizados como sí ocurrió en El Salvador en donde fueron adjudicadas como parte de los paquetes de beneficios (punto 1.1.3.).

Lo anterior demuestra que en primer lugar, el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC se enfoca en beneficiar a la población más vulnerable como por ejemplo el caso de los campesinos, de la mujer y de las víctimas del conflicto armado a través de la eliminación del

analfabetismo (punto 1.3.2.2.), de la protección y seguridad social de la población rural (punto 1.3.3.5.) y de una reforma agraria estructural que implica la garantía de restitución de tierras y del retorno de los desplazados a sus lugares de origen, situación que no representa el otorgamiento de tierras a los desmovilizados.

con respecto a la participación política, se acordó la garantía del respeto, protección y fomento para la creación de nuevos partidos políticos que surjan como consecuencia del tránsito de las farc como grupo armado ilegal hacia un partido político de oposición (punto 2.). para ello, se garantizará la protección individual y colectiva de los líderes y miembros de dichas organizaciones (punto 2.1.2.2.) y se garantizarán “los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia” (punto 2.1.2).

Lo anterior, se encuentra regulado a través del decreto ley 895 del 29 de mayo de 2017, por medio del cual se crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Además, el decreto 299 del 23 de febrero de 2017 incluye como individuos y población objeto de protección especial, a aquellas personas que sean integrantes del nuevo partido político de las Farc.

Ahora bien, de forma explícita, lo referente a la reincorporación de las FARC a la vida civil en cuanto a lo económico, social y político se encuentra establecido desde el punto 3.2 hasta el punto 3.2.2.8 del acuerdo final. En ellos podemos encontrar como ya se dijo, la garantía y protección para la conformación de partidos políticos derivados del tránsito de las FARC a la vida civil que serán financiados y recibirán asistencia técnica (punto 3.2.1.1.). No obstante, hay un punto que causado bastante polémica y es el de otorgarles 5 curules en Senado y 5 curules en Cámara de Representantes de forma directa (3.2.1.2, literal A).

Dicha situación no se había planteado en ninguno de los dos procesos de DDR que se han analizado en esta investigación, pero se puede observar que es una forma de garantizar la representación política y la oposición democrática. Además, este beneficio solo se otorgará durante dos periodos constitucionales que comienzan a contarse a partir del 2018, después de ello, tendrán que competir por dichas curules bajo las reglas electorales ordinarias.

Con respecto a la reintegración económica y social (punto 3.2.2), el acuerdo establece que se permitirá la constitución de un centro de pensamiento de las FARC con la finalidad de adelantar estudios e investigaciones sociales, promover su ideología y adelantar y diseñar programas de formación política (punto 3.2.2.2). Igualmente, se estableció que los desmovilizados serían trasladados a Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) en donde se encuentran actualmente, allí se realiza el debido proceso de identificación, censo y verificación de las necesidades y condiciones de los desmovilizados (punto 3.2.2.6) con el objetivo de acreditar su tránsito a la legalidad, situación que se realizará de forma posterior al proceso de dejación de armas el cual ya se dio (punto 3.2.2.4).

Con respecto a la entrega de armas, es preciso indicar que hasta la fecha de acuerdo con diferentes diarios que han recogido la información de la ONU, se han entregado 8.112 armas que fueron recogidas en las 26 zonas veredales transitorias y se han destruido un total de 1.300.000 cartuchos de distinto calibre junto con material explosivo y así mismo, de las 873 caletas que han sido ubicadas por información de las Farc, se han extraído 510 de forma exitosa (Guerrero, 2017). Lo cual demuestra un gran avance en cuanto al desarme, situación que no se presentó de forma eficaz en Sudáfrica.

Continuando con el tema, una vez realizado y arrojados los resultados del censo socioeconómico, se identificarán los proyectos productivos que permitan vincular al mayor número posible de desmovilizados (punto 3.2.2.6, literal b). En el mismo sentido, establece el acuerdo que cada excombatiente de las FARC que desee emprender proyectos productivos individuales recibirá una ayuda económica por una sola vez equivalente a un valor de 8 millones de pesos (punto 3.2.2.6, literal c).

Esto demuestra el compromiso de las partes, especialmente del gobierno nacional por fomentar la creación de microempresas con la finalidad de que los excombatientes puedan asegurar su subsistencia y la de sus familias a través de proyectos autónomos que les generen los recursos que les permitan sobrevivir sin necesidad de acudir nuevamente a las armas ni a la delincuencia.

Del mismo modo, del censo socioeconómico dependerán los planes de asistencia en materia de educación formal básica, media técnica, tecnológica y universitaria y educación para el trabajo de vivienda, cultura, recreación y deporte y dependerá de ellos también, la asistencia psicosocial y la protección de hijos e hijas de los integrantes de las FARC que se encuentren en proceso de reintegración (punto 3.2.2.7)

En cuanto a los menores de edad que se encuentren en manos de las FARC y que hayan salido de los campamentos, se le garantizará la prestación de medidas de atención y protección especial, lo anterior, teniendo presente el principio del interés superior del menor priorizando de esta forma el acceso a la salud, a la educación, a la reagrupación familiar, al retorno a sus lugares de origen y demás derechos propios de las víctimas del conflicto armado (punto 3.2.2.5).

Por otro lado, una de las medidas asistenciales que también ha originado controversia en la sociedad, es la referente al sueldo, renta y/o prestación económica que recibirán los excombatientes. Mucho se ha especulado acerca de que los mismos recibirán un salario de \$1'800.000, pero dicha situación es completamente falsa, puesto que el acuerdo estipula en su punto 3.2.2.7 que ellos recibirán solo el 90% de un salario mínimo durante 24 meses siempre y cuando no se encuentren vinculados mediante algún vínculo contractual que les genere ingresos. Por lo tanto, a fecha de hoy los desmovilizados recibirían una suma de \$663.945 mensuales (90% de \$7373.717, SMLMV⁵ actual).

Sin embargo, hoy en día los miembros de las FARC que se encuentran concentrados en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización no deben estar recibiendo suma alguna, ya que este beneficio económico se otorgará una vez que haya finalizado la concentración en dichos lugares, momento en cual se les otorgará también una suma única de normalización tasada en un valor de 2 millones de pesos. Del mismo modo, establece el acuerdo que una vez que haya finalizado el término de los 24 meses, los desmovilizados pondrán seguir

⁵ Cifra tomada del decreto 2209 del 30 de diciembre de 2016 que estipuló el monto del salario mínimo para el año 2017.

recibiendo una ayuda económica mensual siempre y cuando acrediten que continúan en proceso de formación educativa.

Igualmente, a los desmovilizados que no se encuentren vinculados a actividades que les generen ingresos, se les garantizará por parte del Gobierno Nacional el pago durante 24 meses de su seguridad social, esto es, los aportes obligatorios que se deben realizar para salud y pensión.

Todo lo que se ha mencionado previamente, se encuentra regulado por diferentes normas tales como el decreto 899 del 29 mayo de 2017, por medio del cual se desarrolla el programa de reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las farc-EP. Así mismo, es posible mencionar el decreto 894 del 28 de mayo de 2017 con el que se reglamentan los programas de formación y capacitación en las zonas de implementación del acuerdo de paz.

Todo esto, recalca el compromiso de las partes por garantizar los medios de subsistencia de los desmovilizados, una situación primordial para que no haya reincidencia por parte de los mismos y trascendental para que la violencia no regrese o se transforme en delincuencia.

Con relación al componente de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, el acuerdo final establece la creación de una Justicia Especial para la Paz (JEP) que se encargará de llevar los respectivos procesos de justicia transicional y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

Allí se impondrán las respectivas sanciones que han sido estipuladas en el acuerdo y que fueron acordadas por periodos que oscilan entre los 5 a los 8 años de restricción de la libertad si reconocen su responsabilidad, esclarecen los hechos, propenden por la reparación de las víctimas y garantizan que no volverán a delinquir; y de entre 15 a máximo 20 años cuando lo anterior no suceda, aclarando que el cumplimiento de las sanciones no se ejecutará en una celda y/o prisión sino en los lugares y territorios adecuados que los magistrados de la JEP fijen para ello, entendiendo que dichas sanciones alternativas buscan un fin de retribución y reparación de víctimas.

Lo referente a la verdad, justicia y reparación se encuentra reglamentado por los siguientes decretos:

- Decreto 588 del 5 de abril de 2017: por medio del cual se define la naturaleza jurídica y objetivos de la comisión de la verdad.
- Decreto 588 del 5 de abril de 2017: con el que se definen los objetivos de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas,
- Decreto ley 903 del 29 de mayo de 2017: con el que se reglamenta la implementación de un inventario de los bienes de las farc.
- Decreto ley 671 del 25 de abril de 2017: el cual establece que todos los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a una reparación integral.

Así mismo, se otorgarán amnistías e indultos a los delitos de rebelión y otros delitos políticos y conexos, aquí también hay debate debido a que el narcotráfico se incluyó como delito conexo, los únicos delitos que no recibirán indultos ni amnistías son los cometidos en contravía a lo estipulado por el Estatuto de Roma como, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad. Situación anterior, que se encuentra regulada a través de la ley 1820 de 2016 y el decreto 277 del 17 de febrero de 2017

Por lo tanto, el acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las FARC incluye no solo amnistías e indultos, sino también, sanciones que no fueron contempladas en los procesos de paz y de DDR de los países analizados en esta investigación. Por consiguiente, a pesar de que se especule acerca de una posible impunidad contenida en el acuerdo, se puede deducir que esto no es así, basta con comparar los casos del El Salvador y Sudáfrica en donde sí se generó amnistía para todos los excombatientes sin siquiera haber reparado íntegramente a las víctimas ni contado toda la verdad de los hechos.

En el marco de la justicia transicional la imposición de penas no significa el encarcelamiento, puesto que las sanciones que se imponen y la finalidad de dicho mecanismo en propender por garantizar el esclarecimiento de los hechos y la no repetición de los mismos, un acuerdo de paz no significa una rendición, sino más bien un pacto que permita superar la

violencia y lograr la reconciliación a través de mecanismos alternativos de justicia y de reparación integral de víctimas.

Se puede colegir entonces, que el proceso de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el proceso de DDR que se está ejecutando actualmente planificó con antelación todos los mecanismos y políticas a implementar en el posconflicto, situación que no se presentó en El Salvador y en Sudáfrica. Por ende, puede decirse que este acuerdo de paz es mucho más completo y mejor estructurado que los que se analizaron en esta investigación ya que abarca todos los aspectos que los anteriores no tuvieron en cuenta a nivel social, político, económico, legislativo y judicial.

3.1. Costos de la implementación del acuerdo de paz.

Dentro de la sociedad colombiana no solo han surgido inquietudes y descontentos que se encuentran fundados principalmente en el desconocimiento de lo que realmente se pactó dentro del acuerdo de paz, pues adicional a ello, la población se cuestiona acerca del costo que tendrá la implementación del posconflicto y de dónde surgirán los recursos que permitan su financiación.

Desde el inicio de los diálogos esta ha sido una gran preocupación, puesto que la implementación del acuerdo de paz demandará un gran esfuerzo económico por parte del Estado colombiano, y es claro que dichos recursos se deben conseguir ya que no se encuentran disponibles. Los mismos deberán financiar políticas sociales de inclusión que permitan la reintegración de los excombatientes y garantizar el pago de los auxilios monetarios que se les debe brindar a estas personas para que emprendan proyectos empresariales y, además, garantizar que reciban el salario correspondiente al 90% del SMLMV durante los dos años que quedaron pactados dentro del acuerdo.

El monto de esto último, si se calcula someramente de acuerdo con el número de guerrilleros que se supone que están en las 26 zonas veredales transitorias (6.900) (Cosoy, 2017), multiplicado por el salario que recibirán de acuerdo con el salario mínimo del 2017 (\$663.945), por los 24 meses, es de \$109.949.292.000 cifra que el gobierno deberá tener

disponible y que se incrementaría durante los dos años de acuerdo con el aumento del salario mínimo y de acuerdo con el número real de excombatientes que recibirán dicho monto, teniendo en cuenta que no hay una cifra exacta ya que pueden existir más de 10.000 exguerrilleros a reintegrar. Prueba de ello, es que recientemente se sumaron a los guerrilleros concentrados en las zonas veredales un número de 2.500 milicianos o colaboradores de las Farc quienes recibirán los mismos beneficios. (El Herald,2017)

De igual manera, si se multiplica los dos millones de pesos que recibirán los excombatientes por única vez (6.900 x \$2.000.000), el monto sería de \$138.000.000.000 adicionales que deberá destinar el Estado para esta causa. Y si cada uno de estos temporales 6.900 excombatientes decidiera emprender un proyecto productivo individual, cada uno de ellos recibiría entonces una suma de 8 millones de pesos también por una sola vez, lo que equivaldría tentativamente a otros \$552.220.000.000 que tendría que tener disponibles el gobierno para cumplir con parte de lo pactado.

De igual manera, se deberá financiar la transición de las Farc a la política, situación que se hará a través de la creación del centro de pensamiento y del partido político de las Farc, financiación que de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda será de hasta 39 mil millones de pesos. (El País, 2017).

Por otro lado, también deberá financiarse la reparación de las víctimas que de acuerdo con cifras estatales hay a la fecha un número de 8.186.896 (Unidad Reparación de Víctimas, 2017) personas registradas como tal que son sujetos de reparación por vía administrativa, y que según el decreto 1084 de 2015 pueden recibir en promedio unos 40 SMLMV como indemnización por los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado. Por lo tanto, un monto tentativo teniendo presente el salario mínimo del 2017, si se multiplicara este por el número total de víctimas, sería de \$6.039.612.356.432, una exorbitante cifra con la que el gobierno claramente no cuenta para poder reparar a las víctimas de inmediato y, por lo tanto, deberá realizarse paulatinamente como hasta ahora se ha venido haciendo.

En general y de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, el posconflicto tendrá un costo superior a los 130 billones de pesos durante los próximos 15 años (Sáenz, 2017)

recursos que provendrán de distintas fuentes como por ejemplo el presupuesto general de la nación que para este año 2017 destinó \$1.8 billones y para el 2018 se incluyeron otros \$2.4 billones adicionales para apoyar la implementación del acuerdo de paz. (Ministerio de Hacienda, 2017a)

Igualmente, se buscan recursos a través de medidas legislativas y tributarias, ejemplo de esto fue la reforma tributaria en donde se incrementó el IVA de un 16% a un 19% buscando recaudar un total de 6 billones de pesos para los 3 pilares del gobierno (paz, equidad y educación). Así mismo, se sancionó la ley 1837 de 2017 que permitió una adición al presupuesto general de la nación del año 2017 en donde se le adicionaron \$1.535.000.000 a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas con el fin de ejecutar planes para el desarrollo del posconflicto, del mismo modo, se radicó ante el congreso un proyecto de acto legislativo de regalías con el que se busca asignar alrededor de \$758 millones de pesos provenientes de las regalías durante los próximos 20 años para la financiación de la implementación de la paz. (Ministerio de Hacienda 2017b).

Por otro lado, también se obtienen recursos provenientes de la cooperación internacional, en este sentido se han recibido aportes de diferentes Estados como por ejemplo Canadá, país que donó 130 mil millones de pesos, (El Tiempo, 2016a) Japón aportó 8 millones de dólares (Aprox. \$240.000.000.000 millones de pesos Colombianos) (Ministerio de Hacienda, 2017a), que serán administrados por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, La unión Europea aportó 575 millones de euros (Aprox. 2.012.500.000.000 de pesos colombianos) (El Tiempo, 2016b) y se espera cuáles van a ser los recursos aprobados por los Estados Unidos que bajo el mandato de Donald Trump se prevé que sean menores a los que se otorgaron en años anteriores para el “plan Colombia” (Semana, 2017)

Así mismo, el Estado estableció desde un principio su apuesta para que el posconflicto en parte se financiara gracias al mayor crecimiento de la economía bajo un escenario de paz, lo cual permitiría una mayor confianza para la inversión extranjera, fomento de la producción y fuentes de empleo. Sin embargo, estos escenarios tardarían un tiempo en evidenciarse al

interior del país, puesto que la paz no se logra con la simple firma del acuerdo de paz, sino que requiere de su eficaz implementación lo cual tomará varios años.

Es así que la financiación del posconflicto no deja de ser un tema preocupante para la sociedad puesto que el costo de su implementación es muy elevado y a pesar de los grandes aportes que puedan recibirse gracias a la cooperación internacional, es claro que se deberán seguir tomando medidas de carácter legislativo y tributario con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos, los cuales deberán satisfacer las necesidades de las víctimas, el desarrollo de políticas sociales enfocadas en derrumbar los índices de desigualdad y pobreza, el apoyo y desarrollo del sector agrario y el garantizar la continuidad de la lucha contra el narcotráfico y demás grupos armados.

Sobre esto último, hay que decir que dentro del proceso de paz se presentó nuevamente un fenómeno como el originado en los acuerdos de paz realizados con los grupos paramilitares, una situación que no se dio en los acuerdos de paz de El Salvador y Sudáfrica y es el caso de los grupos disidentes que no se acogen a los pactado entre las partes. Esta situación se presenta en Colombia principalmente por el negocio de las drogas que representa bastante dinero y dichos grupos disidentes desean adueñarse de ese negocio tal y como sucedió con el surgimiento de las Bandas Criminales que fueron conformadas por antiguos miembros de grupos de autodefensas y que hoy en día dominan el negocio del narcotráfico, esto es lo que puede suceder igualmente con los disidentes de las Farc que no se desmovilizaron.

Por lo tanto, la implementación del posconflicto también deberá tener en cuenta esta situación con la finalidad de no permitir que los territorios que anteriormente se encontraban dominados por la guerrilla de las Farc sean retomados por sus disidentes o por otros grupos armados. Es por esto, que la paz definitiva en Colombia aún está lejos de ser una realidad.

Conclusiones.

Un vez que se han analizado los procesos de DDR de El Salvador, Sudáfrica y el que actualmente se está llevando en Colombia, se puede deducir que el caso colombiano es

mucho más completo y mejor estructurado, ya que hubo una planificación previa acerca de todas las políticas, planes y mecanismos a ejecutar en el posconflicto, en donde se incluyeron aspectos sociales, políticos, económicos, judiciales, legislativos y lo relativo a la reparación integral de las víctimas, además de haberse realizado un gran esfuerzo para que toda la sociedad fuera participe de la construcción de la paz.

Esa planificación previa llevada a cabo en los diálogos de paz de La Habana se presenta como una corrección de los errores que se presentaron en las experiencias previas. Por lo tanto, es muy factible que la implementación del acuerdo de paz en el caso colombiano permita una ejecución más eficaz.

Además, se dice que es factible debido a que dicha situación no depende solamente de lo pactado sino también, de la voluntad política que exista para poder seguir adelante con el proceso de DDR, ya que no es desconocida la gran resistencia, aversión y oposición que se tiene hacia los acuerdos por parte de ciertos sectores políticos.

Por otro lado, en cuanto a los beneficios que recibirán los excombatientes miembros de las FARC, se puede colegir que los mismos se encuentran acordes a lo que se ha otorgado en distintos procesos de DDR, incluso, se ha pactado el juzgamiento e imposición de sanciones alternativas y retributivas que en otros casos como en El Salvador o Sudáfrica no se presentaron.

Estos beneficios no tienen su fundamento en argumentos subjetivos como por ejemplo si los desmovilizados merecen o no recibir las ayudas, por el contrario se basan en normas y experiencias internacionales que se llevaron a cabo en virtud de un elemento jurídico conocido como la justicia transicional que tiene como objetivo propender por la resolución de conflictos armados de acuerdo con estándares que garanticen la reparación integral de las víctimas, la verdad, la no repetición de los hechos y el acceso a la justicia pero con un contenido retributivo con el fin de ayudar con la reconciliación y la reconstrucción de las zonas de conflicto.

Por lo tanto, respondiendo al problema jurídico planteado dentro de esta investigación, se debe decir que sí son idóneos los mecanismos y las políticas de reinserción de excombatientes a la vida civil que se han estipulado dentro del acuerdo de paz, además de idóneas son necesarias para que la paz sea estable y duradera, puesto que si los desmovilizados no reciben la asistencia médica, psicológica, educativa y económica y al no contar con sus medios habituales de ingresos, no tendrán otra opción que volver a las armas o delinquir con el fin de garantizar su subsistencia y las de sus familias.

Las prestaciones que reciben los desmovilizados no deben entenderse como un regalo que se les otorga de manera inmerecida, sino por el contrario, como una retribución otorgada por el hecho de haber dejado las armas para reincorporarse a la vida civil, además, que se hace necesario que reciban todas las ayudas posibles con el fin de que puedan reintegrarse de la mejor manera en la sociedad. Para ello, también es necesario el compromiso y la voluntad de todos los miembros de la sociedad, solo así, se lograría una verdadera reconciliación.

Por consiguiente, para esta investigación el problema para la eficaz implementación de los acuerdos de paz y del proceso de DDR en Colombia no se presenta en las políticas diseñadas para ello, ni siquiera en los recursos económicos que se requieren para la financiación de las mismas, ya que como se mencionó dentro de esta investigación, la implementación de los acuerdos requieren un esfuerzo económico muy alto debido al gran costo que estos implican, pero, el Estado de seguro logrará la consecución de dichos recursos a través de diversas fuentes que se ha mencionado como la colaboración internacional, impuestos y demás. Por lo tanto, la problemática que se puede originar y que coloca en riesgo la continuidad del proceso de paz se presenta debido a la resistencia existente en contra de los acuerdos y a la falta de voluntad política de algunos sectores.

Un cambio de gobierno que se pueda presentar próximamente, el cual se encuentre en contra y en oposición de los acuerdos de paz, por más blindados que a nivel legal se encuentren los mismos, no deja de ser un riesgo para que el proceso fracase debido a lo mencionado con anterioridad. Por lo tanto, es imperioso seguir insistiendo en el diálogo con los sectores que se oponen al acuerdo, es perentorio seguir socializando los acuerdos de paz,

cumplir con los cronogramas y garantizar un proceso de verdad, justicia y reparación transparente y efectivo con el fin de demostrar la voluntad de las partes y el compromiso para lograr la transición hacia un escenario más estable y armonioso en el país.

De igual forma, existen otros escenarios que se pueden presentar en el país y que colocan en riesgo el objetivo del acuerdo y que son circunstancias que no se han presentado en los procesos de paz estudiados dentro de esta investigación diferentes al caso colombiano, y es lo referente a la disidencia y conformación de nuevos grupos armados que quieran apoderarse de las zonas de influencia en donde se mueve el negocio del narcotráfico.

Lo anterior, es una situación que afecta de manera directa la consecución de la paz, puesto que la disputa por el control del narcotráfico trae consigo bastante violencia, lo cual podría afectar el apoyo que a nivel internacional se tiene sobre el proceso de paz, un muestra de ello es la preocupación de los Estados Unidos por el incremento en los cultivos de coca que se han presentado en el país en donde según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pasaron por ejemplo de 48 mil hectáreas en el 2013 a 96 mil hectáreas en el 2015 (UNODC, 2016). Esto podría influir en los recursos económicos que este país pueda destinar para la implementación del acuerdo de paz y es evidente que la falta de este factor económico colocaría en riesgo la implementación del acuerdo.

Lo anterior no solo traería el riesgo que la implementación de acuerdo fracase, sino que para contrarrestar este riesgo, el gobierno tendrían que implementar medidas tributarias que garantizaran la consecución de los recursos, lo que significaría una afectación importante para el bolsillo de los colombianos, situación que además colocaría en riesgo el crecimiento económico del país debido a que el ciudadano se cuidaría de gastar mucho más gracias a la disminución en su capacidad de adquisición debido a la imposición de nuevos impuestos.

Así mismo, con el fin de garantizar los recursos para la paz, el Gobierno se vería en la necesidad de recortar el presupuesto destinado a otros sectores tales como el deporte, educación, salud y cultura que son necesarios para eliminar focos de violencia entre los jóvenes gracias a la inclusión e igualdad que estos representan dentro de la sociedad

Por otro lado, si no se logra superar los índices de desigualdad y pobreza en el país no será mucho lo que se logre avanzar en cuanto a la paz, puesto que en un principio estos dos presupuestos junto con el abandono del Estado fueron los detonantes para la conformación de grupos guerrilleros como las Farc, con los que se mantuvo en constante guerra por más de 50 años. Por lo tanto, si no se logran superar estas variables la violencia muy seguramente continúe o vendrán nuevos grupos que remplazarán a aquellos que se desarmaron y/o las personas simplemente tendrán que recurrir a la violencia como medio de subsistencia, lo que representa que un conflicto se acaba, pero comienzan a surgir otros nuevos.

Es por ello, que el reto de la paz demanda un gran esfuerzo no solo por parte del Estado sino también, de todos los miembros de la sociedad quienes deben comprometerse con la reconciliación y con la generación de oportunidades para las personas que han abandonado la lucha armada.

El gobierno por su parte, deberá comprometerse en la eficaz implementación de los acuerdos a través de la protección que se hace de los recursos públicos previniendo, investigando y sancionando los actos de corrupción, promoviendo la equidad social, derrumbando las barreras de desigualdad, apostándole a la educación, a la salud y a la satisfacción de los derechos de la sociedad, al desarrollo del campo, a la lucha contra el narcotráfico y en general, cubriendo todos los escenarios que puedan ser focos generadores de nuevos o de los mismos tipos de violencia que han afectado al país tradicionalmente.

Referencias.

- Agudelo, C. & Gómez, B. C. (2015). *Conflicto, posconflicto y experiencias en educación para la paz en África*. Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado de <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3877/1/Pasant%C3%ADa%20Conflicto%20Postconflicto%20y%20Experiencias%20en%20Educaci%C3%B3n%20para%20la%20paz%20en%20C3%81frica.pdf>
- Argemi, D. (2010). *El Apartheid sudafricano: consecuencias económicas y sociales*. La Plata, Argentina: Universidad de la Plata. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/40052/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Arias, M. A., Camacho, A., Ibáñez, A. M., Mejía, D. & Rodríguez, C. (Comps). (2014). *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?* Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Barreto, M. (ed.). (2016). *Experiencias internacionales de paz: lecciones aprendidas para Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Cabello, D. A. (2014). *Derecho a la reinserción social*. Trabajo de grado, Universidad Alberto Hurtado. Recuperado de <http://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/7424/DERCabelloT.pdf?sequence=1>
- Cárdenas, J. A. (2011). *Los agujeros negros del desarme. La desmovilización individual en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2002-2010*. Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de

<http://www.bdigital.unal.edu.co/6247/1/Jos%C3%A9armandoc%C3%A1rdenassarrias.2011.pdf>

Centro de Memoria Histórica. (2013). Informe general, Bogotá, Colombia: Autor. Recuperado de http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap2_110-195.pdf

Cifuentes, E. J. (2016). *Del régimen jurídico de la reparación de víctimas y acuerdos de paz: un estudio comparado. Tendencia sobre integralidad*. Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/13667>

Cosoy, N. (2017). *6.900 guerrilleros de las FARC ya están concentrados en 26 zonas en Colombia... ¿y qué sigue ahora?* BBC Mundo. Recuperado de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38888897>

Cotrina, A. (Comp). (2013a). *Resolución de conflictos: Cuatro referentes, Irlanda del Norte, Guatemala, El salvador y Sudáfrica*. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13505/2/Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos.%20CUATRO%20REFERENTES.pdf>

Cotrina, A. (Comp). (2013b). *Procesos de paz: un referente, Sudáfrica (compilación informativa no. 4) entre la democracia y la guerra civil*. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11546/1/Info146%20SUD%C3%81FRICA.pdf>

El Heraldo. (2017). *2.500 milicianos de las Farc se sumarán a guerrilleros que están en puntos de concentración*. Recuperado de: <https://www.elheraldo.co/colombia/2500-milicianos-de-las-farc-se-sumaran-guerrilleros-que-estan-en-puntos-de-concentracion>

- El País*. (2017). *Financiación del partido de las Farc sería de hasta \$39 mil millones para el 2018*. Recuperado de: <http://www.elpais.com.co/colombia/la-financiacion-del-partido-de-las-farc-seria-de-hasta-39-mil-millones-para-el-2018.html>
- El Tiempo*. (2016a). *Canadá dona más de \$ 130.000 millones para el posconflicto*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16636992>
- (2016b). *La Unión Europea anunció más ayuda para posconflicto*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16604247>
- Escola de Cultura de Pau*. (2005). *¡Alerta 2005! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Ed. Icaria.
- Escola de Cultura de Pau*. (2011). *Introducción al desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de excombatientes*. *Quaderns de Construcció de Pau*, (27), Barcelona, España: Autor. Recuperado de: http://escolapau.uab.es/img/qcp/introduccion_ddr.pdf
- González, M. J. (2011). *Conflicto armado interno derechos humanos e impunidad*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre.
- Guáqueta, A. (2005). *Desmovilización y reinserción en el Salvador. Lecciones para Colombia*. Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de <file:///C:/Users/Pao%20y%20Edwin/Downloads/desmovilizacin%20y%20reinsercin%20en%20el%20salvador%20lecciones%20para%20colombia.pdf>
- Guerrero, S. (2017). *La entrega de armas de las FARC en cifras*. *Diario el Herald*. Recuperado de <https://www.elheraldo.co/colombia/la-entrega-de-armas-de-las-farc-en-cifras-392955>
- IEGAP. (2013). *Desarme, desmovilización y reintegración, DDR: Una introducción para Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada.

- Lara, C. (2015). *El subdesarrollo económico como problema ético 1ª ed.* Chile-Argentina: Editorial Latinoamericana. Recuperado de <http://www.analectica.org/wp-content/uploads/2016/03/El-subdesarrollo-economico-como-problema-etico.pdf>
- Mejía, I. (2014). *La reintegración social y económica de los grupos armados ilegales en Colombia: Reflexiones a partir de la trayectoria de nueve excombatientes.* Tesis de Maestría en estudios políticos e internacionales, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Recuperado de <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/La%20Reintegraci%C3%B3n%20social%20y%20econ%C3%B3mica%20de%20los%20grupos%20armados%20ilegales%20en%20Colombia.pdf>
- Ministerio de Hacienda. (2017a). Boletín 055. *Posibilidad de acceso a financiamiento para desarrollo de Colombia y posconflicto, conclusión de visita de Ministro de Estado de Finanzas de Japón.* Oficina de comunicaciones. Recuperado de: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-064724%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased.
- (2017b). Boletín 167. *Aprobado en último debate Acto Legislativo de Regalías para financiar la implementación del acuerdo de paz.* Oficina de comunicaciones. Recuperado de: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-089470%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased.
- Nussio, E. (2013). Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes: Políticas y actores del postconflicto. *Revista Colombia Internacional*. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n77/n77a01.pdf>

- Rettberg, A. (Comp.). (2012), *Construcción de paz en Colombia*, Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.
- Saenz, J. (2017). *La paz le costará a Colombia \$130 billones*. El Espectador. Recuperado de <http://colombia2020.elespectador.com/politica/la-paz-le-costara-colombia-130-billones>
- Semana. (2017). *Paz Colombia con menos dólares que el Plan Colombia*. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/presupuesto-de-trump-propone-recortes-para-colombia/526271>
- Springer, N. (2005). *Desactivar la guerra. Alternativas audaces para consolidar la paz*. Bogotá. Colombia: Editorial Aguilar.
- Torres, H. (2010). El concepto de terrorismo, su inexistencia o inoperancia: la apertura a la violación de derechos humano. *Diálogos de saberes*, pp. 77-90. Recuperado de <http://www.unilibre.edu.co/dialogos/admin/upload/uploads/Articulo%205.pdf>
- Trejos, L. F. (2008). Naturaleza, actores y características del conflicto armado colombiano: una mirada desde el derecho internacional humanitario. *Revista encrucijada americana*, (2), pp. 1-35. Recuperado de <http://www.encrucijadaamericana.cl/articulos/primavera-verano2009/4ea2Naturalezaactoresycaracteristicasdelconflictoarmadocolombiano.pdf>
- Unidad de Reparación de Víctimas. (2017). *Registro único de víctimas*. Recuperado de: <http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV>
- UNODC, (2016). *Estudio de cultivos de coca en Colombia registra importante incremento al pasar de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015*. Bogotá. Recuperado de: <https://www.unodc.org/colombia/es/press/2016/Julio/informe-cultivos-de-ilicitos.html>

Yaffe, L. (2011). *Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta*. Cali, Colombia. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n8/n8a07.pdf>